REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO SESENTA Y NUEVE CIVIL MUNICIPAL HOY CINCUENTA Y UNO DE
PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE

Bogotá, D.C., catorce (14) de marzo de dos mil veintidós (2022)

PROCESO	CONSTITUCIONAL (ACCIÓN DE TUTELA)
DEMANDANTE	YAMILET POO HOYOS, EN REPRESENTACIÓN DE SU HIJO JHON MAICOL CORCHO POO
DEMANDADOS	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
RADICADO	110014003069 2022 00336 00

Agotado el trámite establecido por la ley se procede a emitir fallo dentro de la acción de tutela de la referencia en los siguientes términos:

ANTECEDENTES

La señora YAMILET POO HOYOS señala que la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN le está violentando los derechos fundamentales de su menor hijo JHON MAICOL CORCHO POO a la igualdad, debido proceso y derecho a la educación.

Señala la actora que es madre cabeza de familia y vive con su hijo JHON MAICOL CORCHO POO, que se encuentran registrados como víctimas del conflicto armado. Informa que el 20 de enero del año que avanza presentó derecho de petición a la accionada en el que solicitó le asignaran un cupo a su hijo en los colegios MARIA MONTESSORI (IED) y/o GUSTAVO RESTREPO (IED) que son, en su concepto, los que responden a sus necesidades reales y para que no le subestimen sus capacidades cognitivas por cuanto padece de del síndrome de Asperger y Esquizofrenia. Indica que si bien recibió respuesta la misma fue negativa y le señalaron que ya contaba con cupo en la institución educativa VIVA COLOMBIA.

Informa que es oxígeno dependiente, se encuentra delicada de salud y no cuenta con los medios llevar y recoger a su hijo en el colegio VIVA COLOMBIA el cual queda bastante retirado de su casa; razón por la cual insiste en que le sea asignado cupo en los colegios MARÍA MONTESSORI (IED) y/o GUSTAVO RESTREPO (IED) o en cualquiera cercano a su residencia, y la asigne de los beneficios de Ruta Escolar o Subsidio de Transporte.

Por lo esbozado solicita se tutelen los derechos pedidos en amparo y se ordena a la demandada proceda a asignarle cupo a su hijo en alguno de los centros educativos señalados, así como tuta escolar o auxilio de transporte. }

TRÁMITE

Asumido el conocimiento mediante auto del 2 de marzo del año que avanza se admitió la acción, se vincularon por pasivas a los colegios MARÍA MONTESSORI (IED), GUSTAVO RESTREPO (IED), REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, COLOMBIA VIVA (IED) y HELADIA MEJÍA (IED) y en la misma fecha se le ofició a fin de que emitieran pronunciamiento frente a los hechos relatados por la actora.

La Secretaría de Educación por intermedio del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica remitió escrito en el que informa que se estableció que las instituciones citadas por la accionante no cuentan con disponibilidad de cupo para el grado requerido y por ello no es posible acceder a lo solicitado pero que, teniendo en cuenta que en anterior oportunidad había pedido asignación de cupo en el Colegio República Bolivariana de Venezuela (IED), señala que se le asignó cupo para el estudiante, en grado 6°, jornada tarde para el año que avanza y por ende, lo perseguido en esta acción fue favorable, decisión que fue comunicada a la actora al correo electrónico suministrado.

Termina señalando que teniendo en cuenta que el menor presenta una discapacidad asociada al síndrome de Asperger y Esquizofrenia, la atención que requiere debe ser prestada por la institución educativa, a través de la implementación de estrategias pedagógicas en el marco de la Educación Inclusiva, con el fin de realizar los ajustes razonables pertinentes, que garanticen las trayectorias educativas completas, de acuerdo con los objetivos propuestos que alcance del estudiante.

La rectora del colegio HELADIA MEJÍA I.E.D. señala que la accionante no ha solicitado a esa institución la asignación de cupo para su menor hija.

El rector del colegio REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA en respuesta enviada señala que se está ubicado en la Localidad de Los Mártires, que no es posible acceder a lo solicitado por la demandante por cuanto, desde el año 2014, se encuentran con problemas de sobre cupo. Indica que entiende que los niños tienen derecho a la educación, pero igualmente que, deben ser ubicados cerca a sus lugares de residencia para evitar que deban realizar viajes hasta de 2 horas para poder trasladarse a sus colegios.

Ante la respuesta enviada por la accionada el Despacho procedió a comunicarse con la accionante quien informó que ella no pidió cupo para el colegio REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, que no entiende porque le asignaron cupo para esa institución la cual queda bastante alejada de su residencia y que, sumado a lo anotado, el cupo se le otorgó para el grado 7 cuando quiera que su hijo entra al grado 5.

Señala que después de presentar la tutela recibió llamada de la institución GUSTAVO RESTREPO para la asignación del cupo pedido, que ya le hicieron exámenes al niño y se encuentra en trámite de entregar la documental que le solicitaron, pero, que no se le dijo nada con respecto a la ruta escolar o el auxilio de transporte.

CONSIDERACIONES

El artículo 86 de la Constitución Nacional establece que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

Este mecanismo de orden residual, solamente encuentra procedencia cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, por lo que, se pone al descubierto que la intención y espíritu del

constituyente fue la de introducir una figura alterna o paralela a los juicios y a los procedimientos que constituyen vía común para hacer valer los derechos cuya función se encuentra genéricamente asignada a la administración de justicia y garantizada por la Carta Política.

Es necesario, por tanto, destacar como reiteradamente lo ha expuesto la Corte Constitucional, que, tanto en la norma constitucional, como en su desarrollo legislativo, el ejercicio de la citada acción está condicionado, entre otras razones, por la presentación ante el juez de una situación concreta y específica de violación o amenaza de los derechos fundamentales, cuya autoría debe ser atribuida a cualquier autoridad pública o, en ciertos eventos definidos por la ley, a sujetos particulares. Además, el peticionario debe tener un interés jurídico y pedir su protección también específica, siempre en ausencia de otro medio especial de protección o excepcionalmente, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En cuanto tiene que ver con el derecho a la educación se debe precisar que la Corte Suprema de Justicia en Sentencia T – 434 de 2018, señaló:

“(…) De esta forma, la educación como servicio público exige del Estado y sus instituciones y entidades llevar a cabo acciones concretas para garantizar su prestación eficaz y continua a todos los habitantes del territorio nacional. Los principios que rigen su prestación son tres principalmente: (i) la universalidad; (ii) la solidaridad; y (iii) la redistribución de los recursos en la población económicamente vulnerable. Por otro lado, debe señalarse que si bien la educación es un derecho social, económico y cultural, tanto el artículo 44 de la Carta en el caso de los niños, como la jurisprudencia de esta Corporación en el caso de los adultos, la han reconocido como un derecho fundamental: “El derecho a la educación, tanto en los tratados de derechos humanos suscritos por Colombia como en su consagración constitucional, es un derecho de la persona y, por lo tanto, es fundamental tanto en el caso de los menores como en el de los adultos. Su relación con la dignidad humana no se desvanece con el paso del tiempo y su conexión con otros derechos fundamentales se hace acaso más notoria con el paso del tiempo, pues la mayor parte de la población adulta requiere de la educación para el acceso a bienes materiales mínimos de subsistencia mediante un trabajo digno. Más allá de lo expuesto, la educación no sólo es un medio para lograr esos trascendentales propósitos sino un fin en sí mismo, pues un proceso de educación continua durante la vida constituye una oportunidad invaluable para el desarrollo de las capacidades humanas” Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su Informe anual al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General, del 2 de julio de 2012, al referirse sobre la promoción y la protección de la libertad de expresión en Internet, indicó que la internet es un medio del cual se desprende el ejercicio de Derechos Humanos, así: “(…)”¹¹.

En relación con la educación inclusiva para niños y adolescentes con discapacidades, desde el año 2016 se expidió la Ley 1421 de 2016, reglamentada por el Decreto 1421 de 2017, que estableció los Planes Individuales de acuerdo a los ajustes razonables (PIAR) que son herramientas utilizadas para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje basados en la caracterización pedagógica y social, que incluye los apoyos y ajustes razonables requeridos para el estudiante con diferentes tipos de discapacidades.

Con los PAIR, como lo señaló la Corte Constitucional en sentencia T-020 de 2019, con la adaptabilidad “...se busca que no sean los estudiantes quienes necesariamente se deban amoldar a un único modelo de educación, sino que el sistema educativo se adapte a las diversidades y necesidades de los estudiantes, en procura de combatir la deserción escolar. Siendo así, la satisfacción de este componente se da con la adopción de medidas que flexibilicen el sistema acorde con las necesidades de los estudiantes, adecuando la infraestructura escolar o modificando los programas escolares cuando uno u otro conlleve una barrera al ejercicio del derecho a la educación.”

Por último, en lo que concierne al derecho de petición, el art. 23 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. Dentro del abundante desarrollo jurisprudencial que ha tenido este derecho, se han decantado, en forma general, los siguientes requisitos y presupuestos:

“... c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.

Hechas las precisiones que preceden, entra el Despacho a tomar decisión de fondo.

PROBLEMA JURÍDICO y CASO CONCRETO

En el caso que hoy ocupa la atención la accionante persigue que se protejan a su menor hijo sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la educación, y a la información los cuales, afirma, fueron vulnerados por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN no asignarle cupo para los colegios MARÍA MONTESSORI (IED) y/o GUSTAVO RESTREPO (IED) o en cualquiera cercano a su residencia, así como el beneficio de ruta escolar o subsidio de transporte, esto teniendo en cuenta que por su estado de salud no le es posible llevar y recoger al menor.

La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN en escrito enviado al Juzgado informa que no es posible acceder a lo solicitado por la actora en los colegios señalados MARÍA MONTESSORI (IED) y/o GUSTAVO RESTREPO (IED) ya que no cuentan con cupo, pero, que le fue asignado cupo en la institución REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, sitio donde había pedido también el cupo.

En comunicación realizada por el Juzgado la actora niega haber pedido cupo para el colegio REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA el cual, afirma. Queda bastante retirado de su residencia pero que recibió llamada de la IED GUSTAVO RESTREPO donde le dijeron que le habían asignado cupo para su hijo quien ya presentó examen y se encuentra a la espera de entregar la documental que le fue exigida.

Al proceder el Despacho a revisar la documental enviada tanto a la accionante como al Juzgado se observa de entrada que la salvaguarda implorada está llamada al fracaso, dado que la secretaría accionada explicó que efectuó un estudio para la asignación del cupo en las instituciones educativas requeridas (GUSTAVO RESTREO (IED) y MARÍA MONTESSORI (IED)), el cual arrojó como conclusión un dato negativo, debido al hacinamiento estudiantil que tiene; sin embargo, en aras de proteger el derecho a la educación de la menor, le concedió un cupo en el colegio REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, la que si bien es cierto no es tan cercana como lo pretende la accionante, se le está garantizando el derecho a la educación, sosegando de esta manera la principal preocupación de la accionante.

En este orden de ideas, el Juzgado considera que la Secretaría accionada, no ha vulnerado los derechos fundamentales del menor, pues en ningún momento le ha negado el cupo escolar, situación que debe tener en cuenta la accionante, pues no puede decirse que el derecho fundamental se encuentra vulnerado cuando por razones administrativas se asigna una institución que no es de la preferencia de los padres, y más aún cuando se encuentra sentado que la institución pretendida se podría presentar un hacinamiento, vulnerado así las garantías constitucionales de los demás niños que se encuentran matriculados en esa institución.

Además, no puede perder de vista las actuales circunstancias de salud que atraviesa el país y el mundo entero, debido a la pandemia derivada del Sars-Cov-2 conocida como "covid-19" o "coronavirus", pues todas las Instituciones Educativas debe aplicar todas las medidas necesarias para el cuidado de los menores, como de los profesores y trabajadores de la parte administrativa y en caso de que exista un hacinamiento, será mucho más difícil la protección del derecho fundamental a la salud, el cual tiene el mismo grado de amparo al de educación. Entonces, en esta ocasión debe primar el derecho a la salud de todos los estudiantes sobre la educación, debido a que sin el primero no se podría desarrollar las actividades académicas.

No obstante lo anotado, y como lo informara la accionante, el colegio GUSTAVO RESTREPO de manera directa optó por otorgarle el cupo al hijo de la accionante, encontrándose en la actualidad realizando las actividades pertinentes para matricularlo.

Ante lo anotado, se negará la acción con respecto al derecho a la educación.

Ahora bien, en cuanto tiene que ver con el derecho de petición, en la respuesta enviada a este Juzgado como la remitida a la accionante la accionada guardó silencio en relación a la asignación o no de la ruta escolar o auxilio de transporte y, por ende, la decisión se centrará sobre este ítem.

Teniendo en cuenta lo anotado, se tutelaré el derecho de petición y se ordenará al representante legal, o quien haga sus veces, de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN proceda en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta decisión, a dar respuesta a la accionante con respecto a la petición que presentara de asignación de ruta escolar o auxilio de transporte en el entendido que, de accederse, debe ser para la IED GUSTAVO RESTREPO.

En cuanto tiene que ver con los derechos al debido proceso y a la igualdad, la demandante se limitó a señalarlos sin presentar prueba siquiera sumaria que permita establecer su violación.

Por último, se desvinculan por pasivas a los colegios REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, COLOMBIA VIVA (IED) y HELADIA MEJÍA (IED).

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Sesenta y Nueve Civil Municipal de Bogotá, hoy Cincuenta y Uno de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple., administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela presentada por la señora YAMILET POO HOYOS, quien actúa en representación de su menor hijo, JHON MAICOL CORCHO POO en relación con el derecho a la educación, acorde con lo expuesto.

SEGUNDO: CONCEDER la solicitud de amparo invocada por señora YAMILET POO, quien actúa en representación de su hijo JHON MAICOL CORCHO POO frente al derecho de petición, por las razones expuestas en la parte considerativa de este proveído.

TERCERO: En consecuencia, ordenar al Representante legal o quien haga sus veces de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN proceda en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta decisión, a dar respuesta a la accionante con respecto a la petición que presentara de asignación de ruta escolar o auxilio de transporte para su menor hijo, en el entendido que, de accederse, debe ser para la IED GUSTAVO RESTREPO., a menos de que al emitir esta decisión ya lo hubiere hecho, so pena de hacerse acreedor a las sanciones previstas en los artículos 52 y 53 del decreto 2591 de 1991.

De las diligencias tendientes a dar cumplimiento a este fallo, deberá la entidad accionada informar lo pertinente a esta sede judicial.

CUARTO: ENTÉRESE a las partes la presente decisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 del decreto 2591/91.

QUINTO: De no ser impugnado el presente fallo, REMÍTASE el expediente a la honorable Corte Constitucional para su eventual revisión

Notifíquese y cúmplase,